

**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**  
**SALA TERCERA DE DECISIÓN CIVIL**

**MAGISTRADO PONENTE**  
**MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO**

**Medellín D. E. de C., T. e I.<sup>1</sup>**, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés

Radicación n°.	05001-31-03-001-2012-00662-01.
Proceso.	Verbal, pertenencia.
Demandante.	Gildardo Martínez Aristizabal.
Demandados.	Herederos de Víctor Manuel Martínez Aristizabal y otros.
Procedencia.	Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Oralidad de Medellín.
Decisión.	Confirma la sentencia apelada.
Temas.	Con fundamento en el Código General del Proceso, la competencia del superior, en tratándose de apelación de sentencias, estriba en resolver los reparos concretos y sustentados, hechos por el recurrente, de manera que si estos son incompletos, dado que no atacan argumentos de la primera instancia, directamente relacionados con la decisión, el único camino es la confirmación de la sentencia atacada.
Rdo. Interno	070-17
Sentencia n°.	018-23
Aprobación.	Proyecto discutido y aprobado en sesión virtual de Mayo 25 de 2023.

**I. ASUNTO A RESOLVER.**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, procede la Sala a resolver la apelación interpuesta por el demandante contra la sentencia de 11 de septiembre de 2017, dictada por el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, dentro del proceso verbal de pertenencia promovido por Gildardo Martínez Aristizabal frente a los herederos determinados e indeterminados de los señores Víctor Manuel Martínez Aristizabal, Jesús María, Rosalba, Luis Fernando y César Martínez Aristizabal, difuntos hermanos del señor Víctor Manuel Martínez Aristizabal, y demás personas que consideraran tener derechos en el inmueble, cuya pertenencia se reclama.

<sup>1</sup> Acto Legislativo 01 de 2021, art. 1º. "La ciudad de Medellín se organiza como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación."

## II. ANTECEDENTES.

### 1.- LA DEMANDA.

**1.1.- Lo pretendido.** Mediante escrito presentado el 13 de agosto de 2012, Gildardo Martínez Aristizabal demandó a los herederos determinados e indeterminados del finado Víctor Manuel Martínez Aristizabal y demás sujetos que estimaran tener derechos en el inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria número 01N-170214 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, zona norte, para que, previo el trámite del proceso verbal de pertenencia, se le declarara propietario de ese bien inmueble, al haberlo adquirido por la vía de la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio o usucapión.

Dicha heredad se singulariza de la siguiente manera:

*“Edificio de 3 plantas situado en la ciudad de Medellín, en la carrera 49, distinguido en su puerta de entrada con el número 92-75, primer piso; segundo piso, 92-81, y tercer piso, con el número 92-79. Construido sobre un lote de terreno de 7.1/2 varas o sea 5.92 metros de frente; 30 varas o sea 24.00 metros de centro con sus instalaciones de luz, agua y demás anexidades. Que linda por el frente en 7.1/2 varas o sea 5.92 metros con la carrera 49; por un costado con propiedad que es o fue del señor Gustavo Herrera; por el otro costado con propiedad que es o fue de Marco A. Olarte B.; por atrás con propiedad que es o fue de Ana Julia, Horacio y María Dolores Montoya, según consta en Escritura Pública No. 1034 del 21 de julio de 1981, de la Notaría 16 del Círculo de Medellín”.*

Adicionalmente, reclamó que se ordenara el registro de la sentencia en el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria; que, en caso de oposición, se le reconocieran los dineros invertidos, las mejoras implantadas y la administración de la propiedad, desde 1981 e indexada a la fecha del fallo, y se impusieran las costas del proceso a quien llegase a resistirse.

**1.2.- Los fundamentos fácticos.** Tras memorar el comienzo de sus actividades económicas, en compañía de su difunto hermano Víctor Manuel Martínez Aristizabal, el actor relató que en 1981 aportó \$700.000 para la adquisición de un inmueble, el identificado con la matrícula inmobiliaria número 01N-170214, ya descrito, aunque la compraventa se hizo a nombre del finado Víctor Manuel Martínez Aristizabal.

Anotó que inicialmente ese bien tenía un nivel con terraza, pero que poco a poco fueron construyendo otros dos pisos, a lo cual agregó que ha mantenido arrendado el edificio, para la época de la demanda, a los señores José Manuel Naranjo y Guillermo Gómez.

También dijo que la administración y tenencia de dicho fundo siempre ha estado en cabeza suya, *“o sea desde el 21 de julio de 1981, por ser el verdadero propietario del bien inmueble, encargándose de pagar todos los gastos que genera la propiedad, como impuestos, mejoras locativas y el arrendamiento de los apartamentos que comprende el edificio”*.

En definitiva, estimó que llevaba 30 años administrando y disponiendo de esa edificación, periodo en el que nadie se ha opuesto al derecho que tiene y, por lo tanto, ha ejercido *“la tenencia y posesión del inmueble de forma ininterrumpida y pacíficamente, pues como se expuso anteriormente, él es el verdadero propietario del inmueble”* (folios 3 a 9, cuaderno principal del expediente físico).

## **2.- LA RÉPLICA.**

**2.1.- Contestación de los demandados iniciales.** Admitida la demanda, conforme auto de 17 de septiembre de 2012 (fl. 42), luego de aportada la información pedida por el Juzgado en auto previo (ver folios 37 a 39), fue notificada la curadora *ad litem* de los señalados encausados, quien respondió diciendo que desconocía los hechos de la demanda y que se acogía a las pretensiones *“en cuanto estén sustentadas por los HECHOS que se demuestren a lo largo del proceso”*.

En todo caso, planteó la excepción denominada genérica, fundamentada en *“cualquier hecho extintivo de la obligación, demostrado en el curso del proceso”* (fl. 60).

**2.2.- Contestación de los demás vinculados.** Mediante auto de 2 de julio de 2014 (fls. 85 y 86), el Juzgado que inicialmente conoció este proceso dispuso la vinculación de los herederos determinados del extinto Víctor Manuel Martínez Aristizabal y de los indeterminados de Jesús María, Rosalba, Luis Fernando y César Martínez Aristizabal, difuntos hermanos del señor Víctor Manuel Martínez Aristizabal.

Notificado el curador ad litem, designado para representarlos, contestó diciendo que las publicaciones efectuadas cumplen los lineamientos legales y el Juzgado contaba con pruebas suficientes para decidir (fl. 112).

### 3.- LA SENTENCIA APELADA.

**3.1.- La decisión de primer grado.** En sentencia de 11 de septiembre de 2017, el *a quo* desestimó las pretensiones; estableció los honorarios definitivos de los auxiliares de la justicia, ordenó el levantamiento de la cautela decretada, sin condena en costas (fl. 130).

**3.2.- Las motivaciones del Juzgado.** Después de mencionar los presupuestos estructurales de la usucapión, el *a quo* se concentró en la existencia y posibilidad de usucapir el bien reclamado, y en la prueba de su posesión. En esa medida, enumeró la prueba documental aportada, así como la testimonial practicada.

En su valoración, señaló:

*“No obstante, ello [Los pagos de impuesto predial] nada aporta para establecer la posesión, en tanto no es posible establecer qué persona realizó dichos pagos. Se arriman con la demanda los siguientes contratos de arrendamiento, en los que el demandante actúa como arrendador. (...) **Respecto de los mencionados contratos de arrendamiento, precisa tener en cuenta que el hecho de arrendar un inmueble no es una prueba determinante de hechos posesorios, pero sí indica actos de administración del bien, los cuales se vienen presentando, en tal sentido, desde el año 2002, cuando el demandante alquiló el inmueble (...) a Jinette Carvajal y José Fernando González, tal como se desprende del contrato que aparece a folio 30. A partir de allí aparece un contrato celebrado el 3 de abril de 2008 sobre el mismo inmueble (fl. 22) y uno del 2 de agosto de 2011 sobre el inmueble (...).**”*

Del mismo modo, consideró:

*“Al analizar la declaración del testigo [César Echeverri Tobón], se encuentra que éste es allegado al demandante, por ser éste, como el mismo lo afirma, pariente de su esposa, aspecto que de entrada obliga a que se analice con mayor rigurosidad su dicho, encontrando que el deponente afirma que conoce al demandante con una antelación de 30 años y el inmueble hace más de 20 años, pero sin establecerse cuántos. Y también advierte al inicio de su exposición, que es por referencias del actor, quien, según su manifestación, siempre le ha dicho que el bien es de él. Posteriormente hace una descripción del inmueble y dice que es el demandante el que hace mantenimiento, paga impuestos y arrienda la propiedad, pero no se establece la ciencia de su dicho. Afirma que fue él quien la compró, pero no sabe a*

*quién, ni conoce que documentos tenga el actor acerca de dicha negociación. Es importante resaltar que cuando se le interrogó sobre la existencia de construcciones una vez llegó el activo, negó que existiera alguna construcción. Afirma que la edificación se fue construyendo, lo cual resulta cuestionable, teniendo en cuenta que no conoció el inmueble cuando fue adquirido, pues si su conocimiento del bien es de hace más de 20 años, ello se remonta al año 1993. Por lo tanto, resulta cuestionable su respuesta, la cual, incluso, contradice el hecho 3° de la demanda, donde se afirma que allí había una planta con terraza. Adicionalmente, si bien el testigo afirma que todas las mejoras que existen en este momento las ha realizado el demandante, no responde a la pregunta de cuándo fueron ni por qué se enteró. En suma, no se advierten en el testigo muchos elementos propios de su convicción para lo que afirma y más bien se observa que su dicho obedece a las referencias que dice haber recibido del demandante, aspecto que se hace más evidente, teniendo en cuenta que el testigo no vive ni siquiera cerca del inmueble a usucapir y tampoco de su exposición se desprende que en su calidad de arquitecto haya realizado asesoría o trabajos en el mismo, que hayan sido contratados por el actor, lo que lleva a no dar valor a dicho testigo”.*

Atinente a la restante prueba testimonial, esgrimió que no era suficiente para acreditar la posesión que dice ejercer el actor, entre otras cosas porque parece reconocer dominio ajeno en sus fallecidos padres. Por consiguiente, concluyó:

*“Teniendo en cuenta los anteriores aspectos, en aras de analizar el término de posesión que dice el demandante venir ejerciendo, precisa tener en cuenta que en la demanda se expuso como fundamento de derecho del trámite de esta acción la Ley 791 de 2002, tal como se aprecia a folio 8 del expediente, compendio normativo que modificó el término de prescripción, rebajándolo de 20 a 10 años. De ahí que si bien no hubo manifestación expresa y clara respecto a cuál normativa escogía para que se tramitara su acción, el hecho de invocar esta Ley, como fundamento de derecho, permite inferir que se optó por el trámite de la demanda bajo su amparo (...) Para el momento de presentación de la demanda no habían transcurrido los 10 años para que pudiera demandarse la prescripción pretendida.*

*(...)*

*Tal como se señaló en apartes anteriores, en la demanda, como acto de parte en la que se fijan los límites de la decisión, sin que puedan ser rebasados por el fallador, no se describió a cabalidad el inmueble pretendido, tal como se mencionó al inferir lo actuado en la inspección judicial. Tampoco existe prueba clara y concreta de los actos de posesión realizados por el demandante durante un mínimo de 20 años, anteriores a la presentación de la demanda...*

*Y finalmente, en el análisis que se hizo de las declaraciones rendidas, no favorecen las pretensiones del actor, tal como allí quedó sentado, en orden a lo cual, al no concurrir los presupuestos necesarios para obtener el dominio por prescripción extraordinaria, no puede prosperar la pretensión esgrimida por el demandante” (minutos 14:27 a 38:10, CD anexo).*

#### **4.- LA APELACIÓN.**

**4.1.- Los reparos concretos del convocante.** En la audiencia, censuró el pretensor la valoración de la prueba efectuada por el Juzgado (min. 39:17 CD anexo).

**4.2.- La sustentación de los cargos.** En memorial allegado a esta Corporación, antes de la admisión del recurso, el recurrente expuso que en la sentencia había inconsistencias en la valoración de la prueba, inicialmente, porque las evidencias habían sido practicadas por otro juzgador, lo cual conlleva la violación del debido proceso, del derecho de defensa, del principio de inmediación y de una pronta y cumplida justicia.

Con relación a la valoración probatoria estimó que el *iudex a quo* había desconocido las reglas de la sana crítica, dado que, de las probanzas practicas se podía colegir que el demandante era poseedor del bien pretendido. Además, que desde 1984, cuando falleció su hermano, *“no ha habido oposición alguna de parte de ninguna persona o entidad, ejerciendo mi poderdante actos de señor y dueño en una posesión pacífica, reposada, pública, exclusiva y sin violencia por más de 20 años, causa conocida por todos los colindantes y que fue corroborado en la inspección judicial del inmueble y sus ocupantes el 7 de Noviembre de 2013, por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Medellín, quien avocó el conocimiento para esa época, cosa que tampoco valoró ni tuvo en cuenta el funcionario de turno”*.

Del mismo modo, expuso que el proceso se había iniciado hacía más de cinco años y nunca se decretaron pruebas de oficio. Es más, el interrogatorio al convocante fue desistido y, por ende, no se practicó. De esa manera, estimó que era necesaria e importante la evacuación de esa prueba, *“lo que desestimó también el juez de primera instancia, quien, como se manifestó atrás, para unos eventos aplica el principio de la sana crítica del juez, a su arbitrio, y para otras no”*.

Finalmente, con base en doctrina que trasuntó, adujo que se había vulnerado el derecho a la prueba, lo cual, de paso, trasgrede el derecho al debido proceso, razones por las cuales pidió que se revocara la sentencia recurrida y, en su lugar, se acogieran las pretensiones de la demanda (folios 5 a 10, cuaderno de segunda instancia).

### III. CONSIDERACIONES.

**1.- PRESUPUESTOS PROCESALES.** Efectuado el control de legalidad del proceso, la Sala advierte satisfechos los presupuestos procesales, tales como demanda en forma; competencia del Juzgado; capacidad para ser parte, para comparecer al proceso, así como el interés para obrar, tanto por activa como por pasiva. Además, no advierte configurado un vicio genitor de invalidez, ni motivo alguno para abstenerse de resolver de mérito este asunto.

**2.- SISTEMÁTICA DE RESOLUCIÓN DE LOS EMBATES.** De cara al sistema de pretensión impugnaticia, aplicable en materia de apelación de sentencias, en los términos de los artículos 322 y 328 del Código General del Proceso, establecerá la Sala sí, como lo señaló el a quo, no están acreditados los presupuestos axiológicos de la pretensión de usucapión, entre ellos, la posesión del actor y el tiempo de posesión o sí, como lo dice el recurrente, las evidencias enseñan una posesión superior a los veinte años, en forma continua y pacífica.

Del mismo modo, analizará la Sala si la apelación abordó todos los argumentos del Juzgado para negar la pretensión o si el mencionado régimen de pretensión impugnaticia se convierte en infranqueable barrera para entrar a resolver sobre cada uno de las motivaciones del recurrente.

**3.- PRESUPUESTOS ESTRUCTURALES DE LA USUCAPIÓN.** En los términos del artículo 2518 del Código Civil, mediante la *“prescripción adquisitiva”*, llamada también *“usucapión”*, puede ganarse el dominio de los bienes corporales, muebles o inmuebles, así como los demás derechos reales, si las cosas sobre las cuales recaen los mismos han sido poseídas en la forma **y durante el tiempo requerido por el legislador.**

De ese modo, la prescripción adquisitiva es una consecuencia de la posesión ejercida previamente por el poseedor, ejecutando actos repetidos y continuos de dominio, **durante el tiempo señalado en la norma**, transcurrido el cual la posesión se puede convertir en un derecho real, generalmente de propiedad, previo el adelantamiento de un juicio de declaración de pertenencia, que no es más que la prosperidad de la pretensión constitutiva o la adquisición del derecho por prescripción adquisitiva.

Esta posesión puede ser ordinaria o extraordinaria. Se da la primera cuando existe una posesión regular, esto es, cuando hay justo título y buena fe en la adquisición de la posesión (artículo 764 del C.C.), **y se ha ejercido durante un tiempo determinado** (10 años, reducidos a cinco conforme la Ley 791 de 2002, art. 4). Se tipifica la segunda, cuando, sin título alguno, se posee un bien por un lapso de veinte años como regla general, reducidos a diez, según lo consagrado en la Ley 791 de 2002, artículo 1º.

Ahora bien, en el medio procesal instituido para obtener la declaración judicial de la prescripción adquisitiva de dominio, deben probarse los presupuestos esenciales de la usucapión, a saber:

**a.- Posesión material por el demandante.**

**b.- Que se haya poseído durante el tiempo exigido por la ley.** Diez (10) años para el caso de la extraordinaria, o cinco (5) para la ordinaria, contados desde la entrada en vigencia de la aludida Ley 791, en los términos del canon 41 de la Ley 153 de 1887.

c.- Que el ejercicio de la posesión haya sido público, pacífico e ininterrumpido.

d.- Que se trate de bienes susceptibles de adquirirse por prescripción. O sea, debe tratarse de una propiedad privada, de suerte que no debe tratarse de un bien fiscal, de uso público, o de un bien baldío.

Adicionalmente, la Jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia ha venido integrando, como requisito de la usucapión, que la pretensión adquisitiva, así como la posesión, con las características anotadas y por el tiempo definido en la normativa, se vinculen a un bien determinado, esto es, la cosa que se quiere adquirir debe estar singularizada, de tal suerte que no se pueda confundirse con otra, incluso para valorar si ésta es susceptible de ser adquirida de este modo.

#### **4.- LA APELACIÓN DE SENTENCIAS EN EL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO.**

**4.1.- Momento en el cual se puede sustentar la alzada.** El Código General del Proceso, como lo hacía el Código de Procedimiento Civil, desde la reforma introducida por la Ley 794 de 2003, consagró la necesidad de sustentar la apelación interpuesta en contra de sentencias. En esa medida, estableció que ante el juez de primer grado se interponía la alzada y se precisaban, “*de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisión*”, en tanto que, frente al juez de segunda instancia, previó la necesidad de sustentar dichos reproches, al indicar que



sobre éstos “versará la sustentación que hará ante el superior” (Art. 322 del C. G. del Proceso. Subraya la Sala).

Ahora bien, como el Código General del Proceso se funda en el principio de la oralidad, mayoritaria dentro del proceso civil, señaló que la sustentación se debía hacer en audiencia, la cual se convocaba una vez “[e]jecutoriado el auto que admite la apelación” (art. 327 del C.G. del Proceso). Empero, esta regla sufrió importantes modificaciones en medio de la crisis generada por el Covid 19, ya que en esa época se expidió el Decreto 806 de 2020, el cual, sobre esta temática, instituía un retorno parcial al sistema escrito, al tiempo que, respecto de la sustentación de la alzada, el artículo 14, inciso 2º, señalaba:

*“Ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deberá sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes. De la sustentación se correrá traslado a la parte contraria por el término de cinco (5) días. Vencido el término de traslado se proferirá sentencia escrita que se notificará por estado. Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarará desierto.”*

Actualmente, tras la expedición de la Ley 2213 de 2022, se mantuvo idéntica pauta (art. 12), de manera que la sustentación de la apelación puede darse ante el juez a quo, como ante el juez superior, “a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes” a la ejecutoria del auto admisorio de la impugnación.

Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia STC13412 de 2022, expuso:

*“Teniendo ello de presente, conveniente es recordar que la sustentación por escrito de la apelación, efectuada de forma anticipada ante el juzgador de primera instancia, como ocurrió en el caso auscultado, fue una temática zanjada de manera pacífica por esta Corte en favor de lo sustancial sobre las formas en vigencia del Código de Procedimiento Civil, dando por sentado que la interpretación más benigna para el ordenamiento jurídico, respecto a la expresión que tal motivación de la censura debía exteriorizarse, «a más tardar», antes de fenecer el traslado de segunda instancia para tal propósito, correspondía a aquella que aceptaba que podía darse en cualquier tiempo después de proferida la sentencia de primer grado y con antelación al referido límite, es decir, entendía válidas y vinculantes todas las atestaciones efectuadas con dicho fin antes de finalizar el mentado traslado, incluso con antelación a su inicio.”*

Con fundamento en el precedente citado, es claro que la sustentación de la alzada, contra sentencias, puede efectuarse tanto ante el juzgado de primer

grado, como ante el juez de segundo nivel, sin que, en ningún caso proceda la declaratoria de deserción del recurso.

**4.2.- La adecuada sustentación de los reparos.** Por otra parte, así la sustentación se pueda efectuar válidamente en los varios escenarios comentados, lo realmente trascendente es que la alzada se sustente, y para ello es necesario que se señalen los reparos concretos y se den las razones, en apoyo de éstos. Ello obliga a distinguir la expresión de las censuras contra el veredicto y la argumentación, dado que, los reparos se presentan contra la decisión, conforme los estatuye expresamente el canon 322 del C. G. del Proceso, mientras que la sustentación se hace dando las razones de la inconformidad *“con la providencia apelada”*, cual reza la misma norma.

No es de poca monta que el creador legal haya previsto que los reparos se presentan contra la decisión mientras que la sustentación abarca la providencia, dado que las razones deben controvertir las expuestas por el juez, a manera de motivación de su determinación. En otras palabras y sin querer asemejar los recursos de apelación y de casación, lo cierto es que al apelante le corresponde identificar los argumentos del juez y discutirlos, en orden a quebrar el fallo apelado.

Dicho en sentido contrario, si se apela la sentencia y se indican los reparos concretos, pero se dan razones ajenas a las consideraciones del juez, inconexas con sus motivaciones o incompletas, vale decir, que no ataquen las distintas explicaciones expuestas por el juzgador, no se estaría ante una genuina y cabal sustentación, lo cual incidiría en el trámite que debe gestar el *ad quem*.

Nótese que, si al juez lo rige la regla de la consonancia, en tanto su decisión debe ser congruente con los hechos, las pretensiones y las excepciones (art. 281 del C.G.P.), al apelante también lo rige una regla similar, pues la apelación no se consagró simplemente para presentarla y sustentarla de cualquier manera, sino para discutir las apreciaciones del juzgador. No de otro modo se debe entender el paso del criterio de visión panorámica, establecido en el Código de Procedimiento Civil, que obligaba a entender que la apelación se entendía interpuesta frente a lo que le era desfavorable al apelante (art. 357 del

CPC), al criterio de pretensión impugnaticia, que obliga a resolver únicamente en punto a *“los argumentos expuestos por el apelante”* (art. 328 C.G.P.), siempre que, como resulta obvio, debatan completamente lo expuesto por el fallador.

Ahora bien, cuando no se debaten por completo las consideraciones del juez de primer grado o se dejan argumentos sin cuestionar, los que, por si solos, bastarían para soportar la decisión recurrida, es claro que ésta no puede ser cambiada, dado que el superior no tendría competencia funcional para resolver por fuera o más allá de los argumentos expuestos por el censor, a menos que resulte obligatorio hacerlo, derivado de lo que si podía resolver, como lo estimó el creador legal en la parte final del primer inciso, artículo 328, del Código General del Proceso, que a la letra dispone: ***“El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”*** (Resaltos intencionales).

Sobre el particular, en providencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, con ponencia del Consejero William Hernández Gómez, se expuso:

*“El recurso de apelación es el medio procesal previsto por la ley para manifestar los motivos de inconformidad con la sentencia. En ese orden, la sustentación delimita el pronunciamiento de segunda instancia, tal y como dispone el artículo 328 del Código General del Proceso. Así las cosas, las razones aducidas por el recurrente demarcan la competencia funcional del juez, por lo que, si no existen dichos motivos de discrepancia con la sentencia dictada, el recurso carece de objeto”.*

Y la Corte Constitucional, en SU 418 de 2019, sostuvo:

*“La apelación no debe convertirse en el instrumento a través del cual se pretenda probar suerte ante el juez superior, sino que solo debería acudir a ella en aquellos supuestos en los que existan elementos sólidos que den cuenta de que el juzgador de primera instancia incurrió en una equivocación. Eso explica por qué se exige que la apelación deba ser sustentada.”*

En suma, el *ad quem* sólo puede pronunciarse frente a los argumentos del censor, pero si estos no guardan consonancia con los enunciados por el juez o dejan de atacar aspectos fundamentales de la decisión, la sentencia debe ser desestimatoria de los reparos y, en tal sentido, la única posibilidad es confirmar el fallo confutado.

## 5.- CASO CONCRETO.

**5.1.- Síntesis de la sentencia confutada.** El a quo negó la pretensión de pertenencia apoyado en dos argumentos basilaes: **(i)** *“No existe prueba clara y concreta de los actos de posesión realizados por el demandante”*; y, **(ii)** *“En la demanda se expuso como fundamento de derecho del trámite de esta acción la Ley 791 de 2002 (...) que modificó el término de prescripción, rebajándolo de 20 a 10 años (...) el hecho de invocar esta Ley, como fundamento de derecho, permite inferir que se optó por el trámite de la demanda bajo su amparo (...) Para el momento de presentación de la demanda no habían transcurrido los 10 años para que pudiera demandarse la prescripción pretendida”*.

**5.2.- Resumen de los reparos del censor.** La parte actora, una vez dictada la sentencia, simplemente dijo que no estaba de acuerdo con la valoración probatoria. Y en la sustentación del recurso señaló: **(i)** Que la prueba había sido practicada por un juez diferente al que dictó la sentencia; **(ii)** que el Juzgado desconoció las reglas de la sana crítica en la estimación de la evidencia practicada en el proceso; **(iii)** que no se había valorado la prueba documental, en especial, las facturas de impuesto predial, en su verdadera dimensión; **(iv)** que el proceso no se le dio un trámite adecuado, dado que se debieron decretar pruebas de oficio, al tiempo que se debió practicar la declaración del demandante; y, **(v)** que se había desconocido el derecho a la prueba. En consecuencia, estimó que el señor Víctor Manuel Martínez Aristizabal lleva más de 20 años, ejerciendo *“actos de señor y dueño en una posesión pacífica, reposada, pública, exclusiva y sin violencia”*.

**5.3.- Confrontación de la sentencia con los cargos, en orden a determinar su completitud.** Desde un examen preliminar se puede observar que no todos los argumentos el a quo, para negar las pretensiones, fueron atacados por el recurrente.

Ciertamente, el censor se concentró en la prueba de la posesión, a la luz de los manifestado por los testigos y teniendo en cuenta su visión frente a la prueba documental. Sin embargo, no formuló reparo alguno, ni mucho menos lo sustentó, en relación con la Ley 791 de 2002, como fundamento de derecho de la acción, y su aplicación en el *sub judice*.

Nótese que, en la demanda y, concretamente, en los fundamentos de derecho citados por el pretensor, se enlistó la Ley 791 de 2002 (ver folio 8, expediente físico), la que, en su artículo 1º, redujo el término de prescripción adquisitiva extraordinaria, pasando de veinte a diez años.

Pues bien, la citación de esa normativa condujo al Juzgado a sostener que el activo había escogido el último término de prescripción adquisitiva, para efectos de decidir este asunto, y como los diez años no se habían completado, para cuando se presentó la demanda, contados desde la vigencia de esa ley, la pretensión no podía prosperar.

Evidentemente, ese argumento es discutible, pero lo cierto es que el apelante no lo censuró y, por consiguiente, el Tribunal está impedido para abordarlo, en virtud de lo consagrado en el artículo 328, inciso 1º, del Código General del Proceso, a cuyo tenor: *“El juez de segunda instancia deberá pronunciarse **solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante**, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”* (resalta la Sala).

Dicho en otras palabras, el apelante no discutió que su intención haya sido hacer valer exclusivamente el término de prescripción veintenaria, o que la cita de la Ley 791 de 2002 haya sido un error, sino que guardó silencio sobre el particular, no obstante que ese solo argumento bastaba para negar la pretensión, en tanto la posesión, de acreditarse, debe extenderse por el término establecido en la ley para que pueda prosperar la pretensión de prescripción adquisitiva

Así las cosas, aunque se le hallara razón al recurrente en relación con la prueba de la posesión ejercida por el señor Martínez Aristizabal, de todos modos no se podría revocar, como se pidió, la providencia objeto de alzada, como quiera que la escogencia de la ley de prescripción y el tiempo suficiente de posesión, a tono con la norma escogida, son necesarios para la prosperidad de la acción de pertenencia, de suerte que la omisión del censor conduciría a que el señalado argumento estaría en firme y ello, sin más, llevaría directamente a la confirmación de la sentencia apelada.

Repárese que la entrada en vigencia de una ley, reformativa de los plazos prescriptivos, altera la posibilidad de prescribir, bien sea en forma adquisitiva o extintiva, dado que, conforme el artículo 41 de la Ley 153 de 1887, si el respectivo

término comenzó y concluyó antes de la norma nueva, indiscutiblemente será ese el aplicable en el respectivo proceso, pero si empezó bajo el rigor de regla antigua y bajo ella no se completó, se atenderá, de acuerdo con la voluntad del prescribiente, cuál de los dos preceptos se aplica, siempre que, si se elige el segundo, como en este evento lo entendió el a quo, la prescripción *“no empezará a contarse sino desde la fecha en que la ley nueva hubiese empezado a regir”*.

De lo anterior fluye una regla no escrita, pero vigente en el sentir del legislador de 1887, consistente en que es la voluntad del interesado la que guía al juzgador, pero como esa voluntad puede no siempre ser expresada de manera directa y clara, es oficio de éste auscultar su querer, que fue lo efectuado por el *iudex a quo* en este caso. Por lo tanto, si en ese ejercicio interpretativo erró el Juzgado, debió el recurrente señalar la equivocación para que se abriera la competencia funcional del Tribunal en punto a analizar esa temática, en lugar de prescindir de ese argumento y posibilitar, como ocurre, la firmeza de esa estimación.

Finalmente, como no se está frente a una decisión consecuencial, derivada u obligada, sino frente a un presupuesto, que paralelo al censurado, fue descartado la primera instancia, se repite, la confirmación de fallo apelado deviene imperiosa.

#### **IV. CONCLUSIÓN GENERAL.**

Por consiguiente, aun aceptando los argumentos expuestos para sustentar la alzada, lo cierto es que la argumentación es omisa e incompleta, al extremo de dejar inalterados algunos fundamentos de la sentencia que soportaban, por sí solos, la decisión atacada, todo lo cual, en un escenario como el consagrado en el precepto 328 del Código General del Proceso, conducen a que, en esta instancia se confirme, sin más, la sentencia apelada.

Entonces, se confirmará la sentencia recurrida, pero no se hará condena en costas, en tanto los encausados estuvieron representados por curador *ad litem*.

#### **V. DECISIÓN.**

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, SALA DE DECISIÓN CIVIL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

**RESUELVE.**

**PRIMERO. SE CONFIRMA** la sentencia apelada, de fecha, procedencia y contenido ya indicados.

**SEGUNDO. SIN COSTAS** en esta instancia.

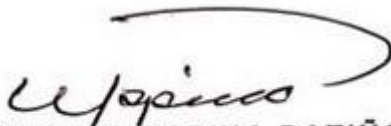
**NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE**



**MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO**

**Magistrado**

*Firma escaneada exclusiva para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Tribunal Superior de Medellín, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022*

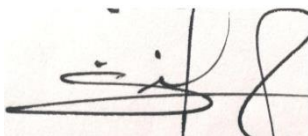


**MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO**

**Magistrada**

*Firma escaneada exclusiva para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Civil Tribunal Superior de Medellín, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022*

**Con aclaración de voto**



(Firma escaneada exclusiva para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Tribunal Superior de Medellín, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022)

**JOSE GILDARDO RAMIREZ GIRALDO**

**Magistrado**